

es

Escuela Social de Tudela y la Ribera

CURSO 2013 – 2014

“EL SENTIDO DE LA POLÍTICA Y LA CONSTRUCCIÓN DE UN PODER CIUDADANO, VÍAS NECESARIAS Y POSIBLES”

6

MARZO/ 2014	TEMA	PONENTE
Martes 11: Ponencia	“Divorcio entre la sociedad política y la civil.”	<u>Milagros Rubio</u> <i>Concejala del Ayto. de Tudela por Izquierda-Ezkerra</i>

ORGANIZA

Fundación Acción Solidaria
www.fundaciónacciónsolidaria.es
Palacio Decanal – Plaza San Jaime, 2
31500 – Tudela

De 8,00 a 9,30 de la tarde

No confían en los políticos pero valoran la política

Los partidos son las instituciones con menor prestigio entre los españoles, pero aumenta el interés por influir en las decisiones de gestión pública. Se buscan otras fórmulas de participación

Antía Castedo

La crisis ha puesto de manifiesto un profundo alejamiento entre los ciudadanos y las instituciones encargadas de representarlos y canalizar sus demandas. No es una realidad nueva, pero el nivel de confianza de los españoles con respecto a los partidos y la clase política alcanza mínimos históricos. Y lo hace al tiempo que aumenta el número de españoles interesados por la política, entendida en su sentido más amplio. Las penurias económicas y la sensación de que el sistema no responde como debería han revitalizado las protestas. Como resultado, los ciudadanos participan más y se manifiestan más que nunca.

La participación política aumenta, y lo hace sobre todo en su vertiente más callejera. Los ciudadanos salen más que nunca a la calle y lo hacen para defender causas concretas. El último y sonado ejemplo ha sido el del barrio de Gamonal, en Burgos, donde los vecinos han conseguido que el alcalde paralice las obras de un bulevar tras cinco días de presión y disturbios provocados por una minoría. El voto, reconocen los expertos, ya no es un cheque en blanco. Al menos no para un núcleo de ciudadanos movilizados que exigen que las instituciones no les den la espalda. Si las políticas no les gustan, salen a la calle, **como ha venido sucediendo con la marea blanca (en defensa de la sanidad), verde (educación) o roja (ciencia).**

Las complejas actitudes políticas de los españoles han quedado radiografiadas en la última **Encuesta Social Europea (EDE)**, que se presentó ayer en Barcelona. Las cifras que muestra esta encuesta son demoledoras para los partidos y los representantes políticos, que no solo no consiguen generar confianza entre los ciudadanos, sino que se presentan cada vez más alejados de los mismos.

Los ciudadanos suspenden en confianza a todas las instituciones: el Parlamento (3,4 es la media de confianza de los encuestados en una escala de 0 a 10); el sistema judicial (3,7); los políticos (1,9); los partidos (1,9); el Parlamento Europeo (3,9) e incluso las Naciones Unidas (4,7). **La única institución que aprueba es la policía (5,8)**, aunque todas ellas obtienen una peor puntuación que en la anterior edición del estudio (2009-2010). La encuesta no incluye preguntas sobre la monarquía, porque solo se pregunta sobre instituciones que existen en todos los países que forman parte de la investigación.

Se trata de un estudio que se realiza de forma simultánea en 29 países europeos cada dos años, con muestras aleatorias entre 1.500 y 2.500 individuos. En España lo realiza un equipo de la Universidad Pompeu Fabra, en colaboración con el Ministerio de Economía y Competitividad, el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) y la Obra Social La Caixa.

La confianza en los partidos y en los políticos presenta los valores más bajos desde que se empezó a hacer la encuesta, en 2002. **Además, los ciudadanos perciben en gran medida que los partidos no se diferencian gran cosa unos de otros.** Entre 0 y 10, el nivel de acuerdo con la afirmación "Los diferentes partidos políticos proponen alternativas que se distinguen claramente entre sí" es de 5,2 en España. El país donde los ciudadanos perciben con mayor claridad la existencia de alternativas políticas es Suecia (6,9), seguido de Noruega y Suiza.

“Aunque no es algo nuevo porque en España siempre ha habido índices de confianza muy bajos, el deterioro es espectacular y debería preocupar a nuestros dirigentes”, explica Mariano Torcal, coordinador de la encuesta y catedrático de Ciencia Política de la UPF. Según Torcal, podría suceder que la caída de la confianza en las instituciones no mejore con la recuperación económica, en caso de que esta se produzca. “Aunque hay una relación con la crisis, el factor predominante es que los ciudadanos no sienten que forman parte de los procesos de decisión”, afirma Torcal. “Parece claro que el sistema político tiene que reaccionar”, añade.

“La nueva ESE **Encuesta Social Europea** sigue mostrando lo que ya apuntan otras encuestas, como las del CIS”, apunta Lluís Orriols, profesor de Ciencia Política en la Universidad de Girona. “España padece una crisis de confianza política que no debe confundirse con un agravamiento de la desafección política”, añade. Las diferentes encuestas muestran que tanto el interés por la política como la discusión sobre asuntos políticos entre amigos y familiares ha aumentado durante la crisis.

Los datos muestran un aumento de casi todos los indicadores de participación política con respecto a la edición anterior. La encuesta mide el grado de implicación política de los europeos con preguntas sobre la participación en manifestaciones autorizadas, colaboración en partidos políticos o plataformas de acción ciudadana, boicoteo a determinados productos por motivos políticos, firma de peticiones o porcentaje de voto en las últimas elecciones.

El aumento de la movilización en forma de manifestaciones es palpable: **un 25,8% de los encuestados afirmó haber participado en una manifestación autorizada en el último año**, un porcentaje que es siete puntos mayor que en la anterior edición y mucho más alto que la media del resto de los países, situada en el 6,7%. Un 21,9% dijo haber colaborado con alguna organización o asociación y un 7,7% declaró haberlo hecho con un partido político o plataforma de acción ciudadana —la pregunta no distingue entre ambos—, frente al 3,1% que lo hacía en 2008, al inicio de la crisis.

“La crisis ha tenido un doble efecto: por un lado el deterioro de la confianza en los políticos y, por otro, un aumento del interés por la política y un incremento de la movilización”, resume Torcal. Aunque España destaca por ser uno de los países europeos con un menor interés por la política, esta ha aumentado de forma significativa: el porcentaje de personas a las que la política les interesa bastante o mucho se sitúa en el 34,6%, frente al 28,3% de la edición anterior. También disminuye el porcentaje de personas que no muestran “ningún interés”, que se sitúa en el 19,3, frente al 31% de la anterior edición o el 36,6% de la primera (2002- 2003).

El aumento de las acciones de protesta está muy ligado al empeoramiento de la situación económica. “Nuestras investigaciones muestran que los parados y las personas que recibían un subsidio y lo han perdido son los que más se movilizan y los que muestran un mayor interés por la política”, explica Guillem Rico, profesor de Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Barcelona.

Viene a agravar la situación el hecho de que los españoles no perciben que los partidos políticos actúen con firmeza para proteger a los ciudadanos de la pobreza o para reducir las diferencias de ingresos entre las clases altas y las más desfavorecidas. Además, la valoración de la situación económica es uno de los indicadores que están peor. Entre 0 y 10, el grado de satisfacción es de 2,2 y ha caído más de la mitad en los últimos cuatro años.

Para Ada Colau, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), estos datos “reflejan lo que se ve en la calle”. El “pacto tácito” según el cual las instituciones ofrecían un nivel mínimo de bienestar a unos ciudadanos desapegados que no se “ocupaban” de la política se ha roto, opina Colau. “El mayor descrédito de la democracia es que los gobernantes se salten sus propias reglas”, dice la activista, que opina que la ciudadanía es cada vez más consciente de que “la política no se puede delegar”. Torcal abunda en esta idea: el deterioro de la economía afecta a los ciudadanos, que son ahora más conscientes de que los políticos “viven de espaldas a sus demandas”.

Según Torcal, el aumento de la percepción de que la corrupción está extendida y de que el poder político está cada vez más alejado de los ciudadanos ha aumentado las formas de protesta de un grupo creciente de personas críticas que no quieren conformarse. Lo que mostraría un caso como el de Gamonal es que “la gente no cree que los votos sean un cheque en blanco. La mayoría democrática no legitima para tomar determinadas decisiones”.

“En los últimos años ha aumentado la movilización orientada a peticiones concretas, alejada de la institucionalidad y que se asienta en el convencimiento de que la legitimidad de una causa está por encima de la legalidad”, apunta Jordi Mir, profesor de la UPF y experto en movimientos sociales. Dentro de estas acciones estarían las protestas de la PAH como muestra de una “desobediencia civil no violenta”.

El sentimiento de rechazo a las políticas surgidas del hervidero de la crisis ha alcanzado, por primera vez en España, a las instituciones europeas. Se trata de un dato destacable, puesto que los españoles se han encontrado siempre entre los ciudadanos europeos que más confianza mostraban en las instituciones de Bruselas. Este “descrédito” puede estar vinculado con la “insatisfacción de los ciudadanos con respecto a las recetas económicas impuestas por Europa, opuestas a las preferencias de la mayoría de los españoles”, razona Orriols. La confianza media de los españoles en el Parlamento Europeo ha pasado de un 4,5 en la anterior edición a un 3,9 en la actualidad.

La crisis de confianza no solo alcanza a las instituciones políticas. Por primera vez cae la confianza de los españoles en el sistema sanitario, aunque siguen figurando entre los ciudadanos europeos que mejor lo valoran. El grado de satisfacción media de los españoles con respecto al estado actual de la sanidad es de 5,2, cuando en 2010 se situaba por encima del 6, y en 2010 en el 6,4 —el nivel más alto de los últimos 10 años—. Lo mismo, pero de forma más grave, ocurre con la educación. Por primera vez, los españoles suspenden el sistema educativo: el grado de satisfacción media es de 4,5 en una escala de 0 a 10. Se trata de una cifra casi un punto inferior a la de 2010.

Baja la satisfacción con los sistemas educativo y sanitario

Esta tendencia es compartida con el resto de países del sur de Europa. Los países del norte que han pasado de puntillas por la crisis o la han sufrido en menor medida presentan valores similares a ediciones anteriores.

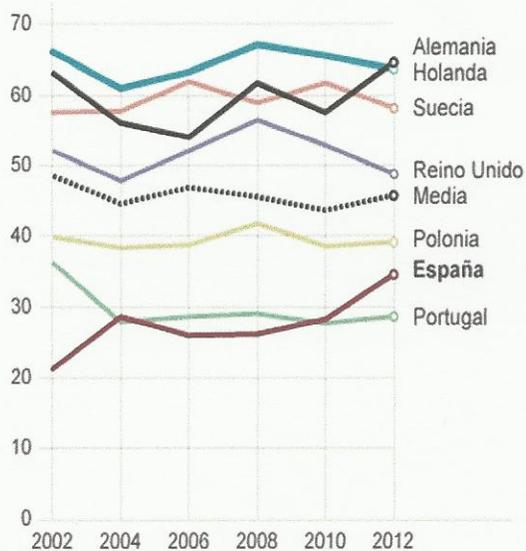
Aunque los datos deben ser tomados con cautela. “Al tratarse de una pregunta sobre percepciones de los ciudadanos, los resultados pueden variar de un mes a otro”, apunta Ismael Palacín, presidente de la Fundación Bofill. En el caso de la educación, la escasa satisfacción puede deberse al “efecto incendiario” de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), la reforma recientemente aprobada por el Congreso e ideada por el ministro José Ignacio Wert. “Los indicadores de resultados muestran una mejora del sistema, no un empeoramiento”, dice Palacín.

Los expertos alertan de que no se debe considerar que estas tendencias estén fraguando un cambio en la cultura política de los españoles. “La política sigue siendo ajena para la mayoría y seguimos por debajo de la media en cuanto interés y discusión en política”, afirma Orriols.

PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LOS CIUDADANOS

► INTERÉS POR LA POLÍTICA

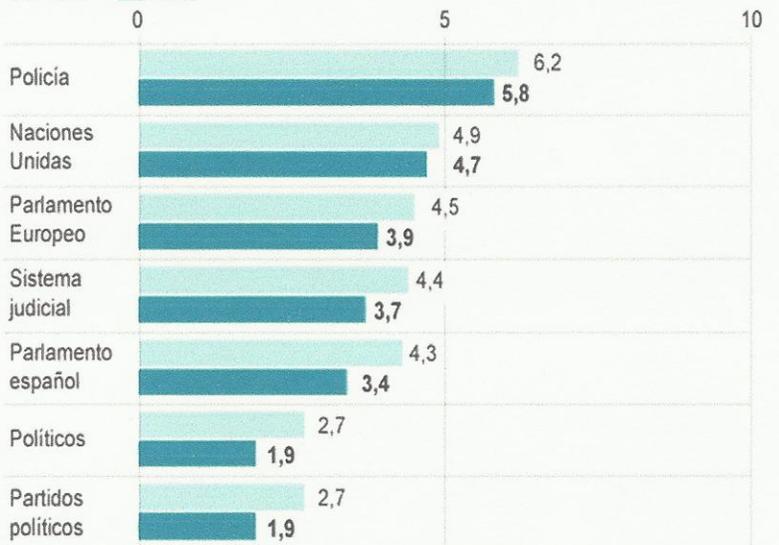
Personas a las que le interesa bastante o mucho, en %



► CONFIANZA EN LAS INSTITUCIONES

De 0 (no confía en absoluto) a 10 (confía plenamente). Puntuación media

2010 2012



► IMPLICACIÓN POLÍTICA

En % | Media europea | España



Participación política de los ciudadanos

Grandeza y descrédito de la política

El contrato básico entre gobernantes y ciudadanos se ha roto con la crisis

Carles Casajuana

Según los últimos barómetros del CIS, uno de los problemas que más nos preocupan hoy a los ciudadanos, tras el paro, la corrupción y la crisis económica, es el de la política y los políticos. Nos preocupa más que el terrorismo, que la inseguridad ciudadana, que nuestro deficiente sistema educativo, que la sanidad, cada día más diezmada por los recortes. ¿Por qué está sucediendo esto?

La política exige a los que hacen de ella su modo de vida no pocos sacrificios. Muchos de nuestros políticos cobran sueldos demagógicamente bajos (un ministro gana poco más que un directivo medio en una gran empresa), trabajan muchas horas y están sometidos a un permanente escrutinio público y a las críticas más feroces, con frecuencia totalmente inmerecidas. ¿Por qué les estamos perdiendo el respeto, justo ahora que la crisis económica está agudizando las tensiones sociales y más les necesitamos para mediar y resolver los conflictos que surgen?

La respuesta obvia es que les estamos perdiendo el respeto porque primero se lo han perdido muchos de ellos (no todos, por supuesto). Que les vemos como un problema porque con su incapacidad para sacarnos de verdad de la crisis, con los escándalos en los que están implicados y con sus acusaciones cruzadas de financiarse ilegalmente y de amparar en sus filas a granujas y delincuentes, se han convertido en un problema. Hay buenas razones para sospechar que el partido que gobierna ha vivido instalado durante muchos años en la mentira de la financiación ilegal. ¿Cómo no les vamos a ver como un problema?

Les estamos perdiendo el respeto porque ellos mismos se lo pierden cada vez que, para no tener que asumir responsabilidades, se esconden en los múltiples recovecos de nuestro deficiente sistema judicial, cuando ponen en entredicho a toda la clase política con el no es verdad, pero tú más con el que suelen reaccionar cuando son acusados de corrupción (sin darse cuenta de que, como cualquier niño mínimamente avisado aprende enseguida, dos excusas son siempre menos convincentes que una sola); cuando se cambian cromos para cubrirse, cuando se valen de los privilegios de su posición — aforamiento, etcétera— para no responder por sus actos. Debería ocurrir lo contrario. Deberían ser ellos mismos los que mostraran con orgullo que una de las grandezas de su profesión es la responsabilidad que deben asumir no solo por sus actos criminales cuando los cometen, como cualquier hijo de vecino, sino por todos los actos propios o de sus subordinados susceptibles de poner en tela de juicio su competencia, su credibilidad o su honorabilidad. Pero muchos solo se acuerdan de esta responsabilidad cuando se trata del adversario.

Los diputados al Congreso —la encarnación de la soberanía, los políticos por antonomasia— se pierden el respeto a sí mismos cada vez que ocupan su escaño sin reclamar que lo abandone la diputada Andrea Fabra, que alcanzó fama merced a aquel edificante “**que se jodan**” dirigido a los parados. ¿Cómo no advierten que la presencia de esta señora en el hemicycle empaña toda su labor? Es algo que debería ofender a todos, pero sobre todo a los miembros de su partido.

El descrédito de los políticos es muy peligroso. Como escribió Jaume Perich, los que creen que todos los políticos son iguales acaban conformándose con los peores. No hace falta recordar lo que ocurrió en Italia tras la profunda crisis de confianza en los políticos de los años noventa: **20 años de berlusconismo**. Además, es tremendamente injusto para muchos que, día tras día, dan lo mejor de sí mismos sin apenas compensaciones.

Posiblemente, sin la crisis económica nuestros políticos no estarían tan desacreditados. La crisis ha roto un contrato básico entre gobernantes y ciudadanos: **a cambio de los privilegios del poder, los gobernantes deben proporcionarnos seguridad y prosperidad**. Si cumplen con su parte, estamos dispuestos a perdonarles muchas cosas, como se ha visto en pasadas elecciones. Pero hoy que la prosperidad brilla por su ausencia, no les perdonamos nada.

Sigue.../...

Además, la globalización de la economía ha dejado a los gobernantes poco menos que inermes ante la crisis. Para rematar, los políticos son el único colectivo que se autorregula, con unas reglas del juego que, en los partidos, protegen demasiado a las cúpulas y, en el Congreso, protegen demasiado al Gobierno. **El resultado es que, en el seno de los partidos, hay muy poco debate; y el que hay en el Congreso suena a menudo a tongo.**

Sin duda, en este descrédito de la política hay un poco de ingenuidad por nuestra parte. A menudo, esperamos demasiado de ellos. Muchos políticos van a lo suyo, como casi todo el mundo. Cuando sus intereses personales coinciden con los de su partido, defienden los de su partido, y cuando los de su partido coinciden con los generales, defienden los intereses generales. Con encomiables excepciones —y las hay en abundancia—, esto es así y es humano que así sea. Lo que hay que hacer es asumirlo y establecer normas y crear instituciones que impidan que sus intereses personales prevalezcan sobre los generales. Es una cuestión de vigilancia y de transparencia, de limitaciones y de contrapesos. También los empresarios van a lo suyo, por ejemplo, y ello no obsta para que, en una economía bien regulada, cumplan una función social ejemplar.

Con frecuencia creemos que los políticos, y en particular los gobernantes, están más capacitados que el resto de los ciudadanos para ejercer el poder. Ello puede ser cierto, si hay suerte —y a veces la hay—, o no serlo. Para lo que sin duda están más capacitados que el resto de los ciudadanos es para alcanzar el poder y conservarlo, y por eso están ahí. Pero no es lo mismo, lógicamente. Les debemos respeto por razón de sus cargos —un respeto que a veces aquí se les regatea, en detrimento de las instituciones—, pero son humanos y tienen tantas limitaciones como todos nosotros, y pensar lo contrario es más propio de una dictadura que de una democracia. Como escribió Montaigne hace más de cinco siglos, en vano se encaraman sobre unos zancos, pues aun con zancos tienen que andar sobre sus propias piernas, y en el trono más elevado del mundo siguen estando sentados sobre sus posaderas. Tenerlo presente nos puede ahorrar muchos desengaños.

En un cuento de Lydia Davies (*City Employment*), el narrador sostiene que el Ayuntamiento de Nueva York contrata a tipos que se comportan como locos para que los neoyorquinos puedan sentirse cuerdos. De igual modo, a veces parece que algunos políticos solo están ahí para que los ciudadanos nos podamos sentir honrados. Sin embargo, pese a sus carencias y defectos, hoy les necesitamos más que nunca. **La erosión de las instituciones y el desgaste del sistema —en casi todos los frentes— exigen políticos de fuste, con imaginación y valentía. Tienen ocasión de redimirse, de mostrar la grandeza de su profesión. Ojalá estén a la altura.**

Carles Casajuana, escritor y diplomático, fue embajador de España en Reino Unido.

El 'caso Bárcenas', fiel reflejo de la cultura de la impunidad

Enrique Santiago Romero - *Abogado de la acusación popular #QuerellaBarcenas*

Desde la admisión a trámite en marzo de 2013 de la querrela de Izquierda Unida, Asociación Libre de Abogados, Ecologistas en Acción, Confederación Los Verdes y Justicia y Sociedad, contra distintos dirigentes del PP y los empresarios que aparecen en los papeles de Bárcenas, todo el país viene constatando que el partido de Mariano Rajoy podría haber cimentado el inmenso poder que detenta en las instituciones del Estado gracias a una abundante financiación irregular procedente de empresas contratistas de la administración que tenían prohibido, por mandato legal, financiar a partidos políticos. Las mismas empresas que se han enriquecido, bien con las desmedidas políticas de infraestructuras pagadas por el presupuesto del estado o bien con las privatizaciones de servicios públicos básicos como el saneamiento, la recogida de basuras o el suministro de agua, aparecen en esos "papeles" como presuntas responsables de financiación irregular al PP, mediante abundantes pagos de dinero aplicado por la dirigencia de ese partido al cobro de dádivas personales, probablemente para influir en la adopción de aquellas decisiones políticas que tanto dinero han hecho ganar a las grandes constructoras.

El sistema de financiación que ponen de manifiesto los denominados papeles de Bárcenas con toda probabilidad data de antes que su primer apunte. Éste, en el año 1990, refleja un ingreso de 8 millones de pesetas efectuado por "R.N.", Rosendo Naseiro según ha manifestado Luis Bárcenas, quien fuera Tesorero del Partido Popular y en tal condición sometido a proceso judicial en 1.990 por presunta financiación irregular del partido. Naseiro nunca fue condenado, al anular el Tribunal Supremo importantes pruebas de cargo que lo inculpaban, dando lugar a una situación de impunidad que sin duda propició el mantenimiento del ilícito sistema de recaudación hasta fechas recientes, si es que consideramos que ya no opera.

Entre enero de 1990 y mediados del año 2008, – atendiendo a los movimientos y periodo contable recogidos en los papeles de Bárcenas- el sistema de financiación puesto en marcha en los años 80' en el PP continuó funcionando regularmente, siendo tesoreros Francisco Álvarez-Cascos -en funciones- entre 1990 y 1993, Álvaro Lapuerta hasta 2008, y Luis Bárcenas hasta al menos el año 2010, manteniendo este último despacho en la calle Génova, coche oficial y secretaria hasta final del año 2012, un año después de ganar las elecciones generales el PP y acceder a la presidencia del gobierno el presidente de ese partido.

Actualmente, veinticuatro de los querrelados por la acusación popular han sido imputados por una serie de hasta doce delitos de los denominados "de cuello blanco", conductas antisociales que conllevan enriquecimiento ilícito y que solamente pueden ser ejecutadas por quienes ocupan posiciones de privilegio y dominio en la pirámide social, defraudando así doblemente la confianza de los ciudadanos. Son hasta ahora veinte empresarios y cuatro dirigentes del "aparato económico" del Partido Popular, pero la investigación evidencia el conocimiento que toda la cúpula del PP tenía del sistema de financiación ilegal, sistema del que procedían sus "sobresueldos"

La acusación popular mantiene que los pagos reflejados en los papeles de Bárcenas, varios millones de euros, se hicieron con la finalidad de influir en las contrataciones de obra pública decididas por los distintos ministerios y por los consejos de gobierno de las comunidades autónomas gobernadas por el PP, al menos durante los años en que se hicieron los pagos ilegales. Años en los que España vivió en una inmensa burbuja financiera e inmobiliaria que al estallar nos dio de bruces con 6,5 millones de parados y 1 millón de personas que están perdiendo sus casas por los desahucios. Nuestro país gastó miles de millones de euros en infraestructuras que se han manifestado inútiles a la vez que han provocado millonarios beneficios a las mismas empresas que aparecen pagando al PP en los papeles de Bárcenas.

Entre 1990 y 2008 España ha sido el país de la “UE a 25” que más porcentaje de PIB ha destinado a infraestructuras y obra pública, mientras ha sido de los tres países que menos porcentaje de PIB ha destinado a gasto social. La investigación judicial en marcha acreditará que las empresas que aparecen en los “papeles” no pagaban únicamente por la concesión de contratos, sino por intervenir en el diseño de los grandes programas de infraestructuras de este país, planes que han dado como resultado aeropuertos sin aviones, autopistas de peaje quebradas por las que nunca han circulado vehículos, y estaciones de AVE sin pasajeros.

Demasiadas han sido las voces que desde febrero de 2013 anunciaban lo estéril del esfuerzo desplegado por Izquierda Unida y el resto de querellantes, esfuerzo obligado ante la inacción y falta de iniciativa de los poderes públicos, puesta de manifiesto por el papel desempeñado por una fiscalía que demasiadas veces se asemeja, por sus estrategias, a las defensas de los imputados, lo que propicia de facto una vergonzosa situación de impunidad. La inaudita actitud de la Fiscalía Anticorrupción, -que aún no ha presentado denuncia alguna y se limita a oponerse a la práctica de diligencias de investigación o a alegar la prescripción de los delitos investigados- así como un Código Penal que contempla escasa penalidad para aquellos delitos económicos que solo pueden cometer los poderosos, hace difícil, -aunque no imposible- alcanzar justicia y efectiva reparación del daño causado. Leves penas de prisión nunca acordes con el inmenso daño social que provocan estos delitos contra la sociedad. Tratándose de una investigación penal que afecta directamente al Partido que gobierna España, - hasta tener que acordarse la entrada y registro en la sede del Partido Popular ante su clamorosa falta de colaboración con la justicia- no es de extrañar, a la vista de la cultura de impunidad imperante, que llevemos meses asistiendo a constantes injerencias en los distintos equipos de investigación adscritos al juzgado instructor y dependientes de la administración central del estado, siendo sustituidos integrantes y responsables de estos equipos a consecuencia de decisiones adoptados por políticos del partido cuya financiación irregular se investiga.

A fecha de hoy, acreditados como veraces en sede judicial al menos cincuenta apuntes contables de los papeles de Bárcenas, el PP y el resto de los imputados recurren nuevamente a la búsqueda de la impunidad ya disfrutada en su día por el tesorero Naseiro, bien buscando el sobreseimiento -archivo- de la causa en fase de instrucción, o bien provocando la nulidad de actuaciones para impedir en ambos casos una condena. La obligación de la sociedad, -representada en esta causa por la acusación popular y no por una inane fiscalía- es trabajar para que se haga Justicia con los responsables y las víctimas de este inmenso crimen social que se conoce como “crisis”, obteniendo la condena de aquellos que se han lucrado corrompiendo o siendo corrompidos.

Los papeles de Bárcenas también han puesto de manifiesto que en España pervive una cultura de la impunidad -ausencia de castigo de graves crímenes- que ha permitido que los poderosos no den nunca cuenta de sus delitos ante la sociedad. Los hijos de los generales franquistas hace años que cambiaron los cuarteles por asientos en los consejos de administración de bancos y grupos empresariales. Educados en la impunidad absoluta de la dictadura franquista, las endogámicas castas dominantes no han dudado en cooptar gobernantes, con claro afán de enriquecimiento personal y correlativo despojo del patrimonio público, empobreciendo masivamente a los ciudadanos.

Aun con pocos medios, si la Justicia quiere acabar con la impunidad, puede hacerlo. Cuenta con suficientes mecanismos para ello, así como con el coraje y compromiso de muchos ciudadanos, funcionarios y profesionales técnicos y del derecho. Para ello es imprescindible no someterse a la lacra de la impunidad, rechazarla y trabajar para erradicarla. Los numerosos apuntes contables de Bárcenas y las innumerables ramificaciones de estos, requieren aun mucha investigación judicial para dar a conocer la verdad que ocultan. **La Verdad es la más eficaz arma en la lucha contra la Impunidad, además de un derecho de un pueblo que asiste escandalizado al desenmascaramiento de la inmensa maquinaria de corrupción que ha engrasado durante años la acción política de las fuerzas conservadoras en España.**

El motor de la acción política

David Ortega Gutiérrez es Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Rey Juan Carlos.

La encuesta del CIS del mes de noviembre no ha arrojado ningún resultado diferente a las tendencias de los últimos meses, incluso podríamos decir, de los últimos dos años. **El paro sigue siendo el principal problema para los españoles, seguido de la corrupción y la baja consideración de la clase política.** Si tuviéramos que hacer un diagnóstico del ambiente político en nuestro país, creo que no nos equivocaríamos al afirmar que es de una profunda desilusión y desafección respecto de nuestra vida pública o, más concretamente, política. Por lo demás, el último *Informe del índice de percepción de la corrupción en el mundo durante el año 2013 de Transparencia Internacional* arroja unos malos resultados para España, hemos retrocedido diez puestos, en el año 2012 estábamos en el puesto 30 y ahora nos situamos en el 40 de 176 países. Dinamarca y Nueva Zelanda se mantienen en cabeza. Vamos pues por el camino equivocado y tenemos que trabajar duro en esta materia. El estudio se centra en la corrupción en el sector público.

Reconozcámoslo, es un primer buen paso, España tiene un problema de consolidación o vivencia democrática importante. Tenemos que ser conscientes de algunos principios básicos del régimen democrático. **Primero.** La vida política es una responsabilidad de todos. Es cierto que hay unos principales actores políticos, pero éstos no dejan de surgir de la propia sociedad. Los políticos españoles no vienen de Suecia o de Dinamarca, vienen de España, son el fruto o resultado de nuestra sociedad, nos guste o no admitirlo. **Segundo.** Hay que reflexionar sobre nuestro sistema de selección de líderes. Algo está fallando de manera importante en nuestros partidos políticos, aquí está una de las claves. Es fundamental elegir dentro de los partidos políticos a las personas más preparadas en un sentido amplio del término. En los puestos importantes de una Nación tiene que haber personas honestas y profesionalmente competentes, de lo contrario, a esa Nación no le irá bien y tendrá serios problemas de funcionamiento institucional. **Tercero.** No se puede perder el sentido institucional de la política. Las instituciones son esenciales para el buen funcionamiento de la democracia y el fin de éstas siempre debe ser el interés general, el bien común superior a los intereses particulares o sectoriales. **Cuarto.** La democracia es diálogo, convivencia en la diferencia, consensos dentro de la pluralidad. El motor de la democracia es el acuerdo, el pacto político para la consecución de unos objetivos concretos, siempre orientados al interés general, no a la satisfacción de un número escaso o amplio de intereses particulares u oligárquicos. **Quinto y último.** En democracia los principios básicos no se discuten y se tienen que respetar por todos los actores políticos. En caso contrario, los votantes tienen que exigirles ese respeto y penalizar su ausencia en las elecciones correspondientes. **La corrupción hay que castigarla, no puede salir gratis, hay que respetar los principios esenciales de la democracia, a saber, el Estado de Derecho, la independencia de los jueces, el principio de legalidad, el respeto de los derechos fundamentales y libertades públicas y la consecución de una sociedad más libre y justa.**

Vivimos tiempos complejos, donde es necesario tener las ideas claras en política. Es preciso un lenguaje claro, cumplir la palabra dada para ser creíbles, decir a la gente la verdad, tener vocación de servicio. El motor de la política es una rara combinación de razón y pasión en equilibrio, inteligencia y generosidad, saber priorizar los grandes objetivos y, sobre todo, decirle a la gente la realidad de las cosas y actuar en consecuencia.

Inmovilismo

El PP confía en que el tiempo arregle los problemas y el PSOE no da señales de cambio

Josep Ramoneda

El régimen se está cayendo y las élites políticas no se dan por enteradas. El inmovilismo de los dos grandes partidos contrasta con el dinamismo de una sociedad que se mueve e inventa para resistir a las fracturas sociales y al empobrecimiento generado por las políticas de austeridad (los ingresos familiares han caído a los niveles más bajos desde el inicio de la crisis, mientras el Gobierno, a coro con los grandes empresarios, proclama el fin de las penurias).

Con la Corona en su momento de máximo desprestigio, el Rey anuncia, en vigilia de Navidad, que no se separará del cargo hasta la muerte. El PP sigue confiando en que el paso del tiempo arregle los problemas, pero no tiene nada que decir a los ciudadanos sobre la profunda crisis social en que ha derivado la crisis económica y suple la carencia de un discurso modernizador y regeneracionista con un retorno a la tradición nacional-católica. El ministro Margallo expresaba en Barcelona su preocupación por el crecimiento de la extrema derecha y del populismo en Europa. ¿Por qué no se lo cuenta a los suyos? ¿O es que la ley del aborto, jaleada por Le Pen, y la ley de orden público no son de extrema derecha? En fin, el PSOE lleva dos años preparando la renovación sin dar una sola señal de cambio, genuino exponente del destino de la socialdemocracia que, con su alergia al riesgo, se está convirtiendo en toda Europa en el partido del miedo.

Con este inmovilismo político, empieza un encadenado de convocatorias electorales. En mayo hay europeas. Y los dos grandes partidos temen que los ciudadanos las conviertan en las elecciones del **“no nos representan”**. El 9 de noviembre Cataluña votará pase lo que pase, porque Mas ya ha dicho que si el Gobierno prohíbe el referéndum, convocará elecciones anticipadas. En 2015 tendremos municipales y, a finales de aquel año, legislativas. Los intereses generales y los intereses de partido colisionarán repetidamente en unas convocatorias sobrecargadas de factores añadidos. Y, sin embargo, salvo la ruptura independentista en Cataluña, no hay ninguna novedad en la política española. ¿Es posible que el debate político se reduzca al secesionismo y a la restauración conservadora del PP? Puestos a hacer de la necesidad virtud, la rebelión de algunos alcaldes y presidentes autonómicos del PP contra la ley del aborto Rajoy-Gallardón podría ser un signo esperanzador: los que están más cerca de la calle advierten al Gobierno que vive fuera del mundo. Pero los partidos están muy jerarquizados y la fronda se ahogará pronto. Es la oposición la que ha de salir de su letargo. No basta combatir esta atrocidad que es la ley del aborto. Hay que romper el miedo, ser capaz de proponer un proyecto político diferenciado y con sentido, por mucho que pueda molestar a la autoridad competente, económica o militar. El inmovilismo conduce inexorablemente a la irrelevancia.

Suspenso total

Los ciudadanos están convencidos de que no se decide en función de sus intereses

Josep Ramoneda

Suspenso total: 1,9 sobre 10. Es la puntuación que los españoles dan a los políticos y a los partidos, según la Encuesta Social Europea. Nunca el descrédito de las instituciones había sido tan grande, pero la indignación no es contra la política, es contra quienes la protagonizan, sus organizaciones y sus prácticas. Como dice el profesor Mariano Torcal, responsable de la encuesta en España, paralelamente a esta pérdida de confianza ha aumentado el interés por la política y la participación en movilizaciones y plataformas sociales. Política sí, pero de otra manera.

La resistencia de los propios partidos a reconocer este deterioro y obrar en consecuencia es la mejor prueba de la degradación a la que han llegado. Pero ¿cuáles son las causas de este desencuentro con la sociedad? Enumeraré cinco: La falta de empatía con los ciudadanos en una gestión de la crisis completamente tecnocrática, como si la política fuese una simple sirvienta de la economía, en la que ni siquiera el paro es visto como una suma de tragedias personales, sino como una variable estadística. La sensación de que la clase política vive en un mundo aparte, tallado a su medida, que le permite saltarse las reglas que obligan a los demás: demasiados privilegios (es difícil creer que todos somos iguales ante la ley), demasiada corrupción, demasiada pasividad ante ella, demasiado patriotismo de partido (los corruptos se dividen entre los nuestros y los otros), demasiadas horas perdidas en restringir los debates en el Parlamento en vez de fomentarlos y en amagar los problemas en vez de afrontarlos. Excesiva promiscuidad con el dinero: la crisis de las cajas ha sido una debacle para la política; y tanta foto de dirigentes políticos rodeados de banqueros y empresarios (la última, Rajoy en Washington) no ayuda a la confianza, al revés, aumenta las sospechas sobre las deudas y dependencias: ¿Para quién gobiernan? Ineficiencia de los partidos para garantizar sus dos tareas principales: la representación política y la selección de personas adecuadas para el ejercicio de los cargos públicos. Incapacidad para dar sentido a la política, para plantear proyectos que den una perspectiva de futuro a la ciudadanía.

En resumen: “Los ciudadanos no sienten que formen parte de los procesos de decisión”, dice Mariano Torcal. Es más, están convencidos de que no se decide en función de sus intereses. Cunde la idea de que hablamos de democracia, pero estamos en una aristocracia, en manos de unas élites con poco estilo. ¿Qué quieren los ciudadanos? Que la política esté a su servicio y no al de unos pocos: quien tiene un arma como el BOE no puede alegar falta de poder. Y más concretamente que se discutan abiertamente las prioridades. Y estas, para los ciudadanos, en este momento tienen un nombre: crisis social.

El gran malestar

La mayoría de la población cree que las leyes están concebidas para beneficiar a los ricos

Joaquín Estefanía

En las reacciones ciudadanas ante el conflicto urbanístico de Gamonal y ante la privatización de la sanidad madrileña —ambos, dos tremendos fracasos para sus responsables, el alcalde de Burgos y el Gobierno de la Comunidad de Madrid, respectivamente— ha habido sendas percepciones que se han repetido con gran frecuencia. La primera, las de los que decían “no nos escuchan”, que refleja la enorme distancia que en muchas ocasiones se está dando entre la gente y sus representantes. La segunda, la de quienes declaran que muchas de las decisiones políticas y de las normas que se adoptan están *fabricadas* para favorecer a “los otros”, a los que se identifican con los ricos (en Burgos, aparcamientos para pudientes; en la sanidad, la salud como negocio privado).

"No nos escuchan" y "gobiernan para los ricos", las percepciones que más se repiten.

Esta segunda percepción conecta con la parte más política del reciente informe sobre la desigualdad en el mundo hecho público por la organización no gubernamental Oxfam y titulado intencionadamente *Gobernar para las élites*. En él se explica que los sondeos de Oxfam confirman esta tendencia: que la mayoría de la población cree que las leyes y normativas actuales están concebidas para beneficiar a los ricos. Una encuesta realizada en seis países (España, Brasil, India, Sudáfrica, Reino Unido y EE UU) lo pone de manifiesto. En nuestro país, ocho de cada 10 personas están de acuerdo con la afirmación, lo que da lugar a una apropiación de los procesos políticos y económicos por parte de las élites económicas.

Este es el germen de lo que el profesor italiano Carlo Galli denomina “el malestar de la democracia” (libro del mismo título en Fondo de Cultura Económica). Ese malestar tiene dos elementos: el subjetivo, el del ciudadano, que se concreta en desafección, indiferencia cotidiana, aceptación pasiva, y el objetivo, que se concreta en la inadecuación de las instituciones para cumplir sus promesas, para estar a la altura de sus objetivos, para otorgar a todos igual libertad, iguales derechos e igual dignidad.

Según Galli, no hay un rechazo “contra” la democracia, puesto que mientras que la democracia real está en crisis, la democracia como ideal es exigida en casi todas partes. Sus presupuestos lógicos y los valores que representa no son impugnados, sino que se cuestionan sus reglas y sus instituciones, y sus prestaciones son decepcionantes para un número cada vez mayor de personas.

El “no nos escuchan” y el “gobiernan para los ricos” no ha llevado aún a la incertidumbre de tener que elegir entre dos opciones políticas diferentes, sino a la insatisfacción que produce la democracia al estar unida a la sospecha de que no existen alternativas mejores a la misma. Pero cuando la crisis económica pase a segundo plano, todas estas debilidades del sistema emergerán en primera instancia. El malestar de la democracia va acompañado por la idea de que estamos siendo engañados, una idea típica del siglo XX que se ha extendido al XXI.

División y discordia

Josep Ramoneda

Descalificación del adversario, desprecio al discrepante, reacción paranoica ante las críticas, y tendencia a prohibir, en vez de resolver, los problemas que incomodan. Son estas algunas constantes de la retórica espontánea de los políticos. Este fin de semana el PP ha celebrado su convención en Valladolid. Los convocados entraban debidamente confesados. La consigna era: triunfalismo económico, exaltación de la unidad del partido, y pasar de puntillas sobre todo lo demás. Es decir, silencio sobre la crisis social (que el PP se niega a ver), las movilizaciones (que le han infligido dos derrotas importantes en Gamonal y en la Comunidad de Madrid), la cuestión catalana y los temas que más dividen al partido popular y a su electorado: el final de ETA y el proyecto de ley del aborto.

Puesto que es difícil prohibir la realidad, los temas no deseados no han podido ser silenciados del todo. Así Ruiz Gallardón, presionado desde la calle, dijo que “no habrá ni un insulto, ni un grito” que le haga abdicar de sus proyectos sobre el aborto. Para el ministro los argumentos de los que están contra su ley, es decir, de los que defienden derechos vigentes hoy en España y en la mayor parte de Europa, son insultos y gritos. ¿Esto es una manera respetuosa de atender las razones de los demás? ¿O es la expresión del autoritarismo del que quiere imponer su visión antropológica a toda la sociedad?

El miedo a explicar el proyecto político, convierte el ritual político de exaltación del partido en pura y vacía propaganda. La Convención del PP ha tenido tan poco grosor político como la entrevista a Rajoy en *Antena 3*. Y en estos casos la ausencia de política se sustituye por la exaltación de la propia obra y las agresiones a los adversarios, para entusiasmo de la feligresía, conforme a la concepción de la política como el juego del amigo y del enemigo. En vez de orientar a la militancia y a la ciudadanía sobre los problemas en curso y los caminos para resolverlos, Mariano Rajoy se ha dedicado al autobombo —de dudoso gusto ante la realidad social española— y **ha sobreactuado con un ataque a Rubalcaba más propio de un sargento chusquero que de un registrador de la propiedad**: “O te callas o reconoces el mérito”, al PP, por supuesto. Débil debe sentirse Rajoy como para acudir al matonismo y echar mano todavía del discurso de la herencia recibida.

¿Novedades de la Convención? Ninguna. Vagas promesas de bajada de impuestos (como si la ciudadanía, después de lo vivido, todavía creyera en los Reyes Magos) y exaltación de la unidad (que es lo que más se oye cuando las discrepancias alcanzan a la familia). Rajoy dice que combatirá todo lo que siembre discordia o divida los españoles. Puede empezar por su propia casa: mandando al limbo el proyecto de ley del aborto, reconociendo la crisis social y rectificando las medidas que han condenado a la pobreza a millones de personas, o tratando con el respeto que merece a una proposición de un parlamento autonómico avalada por los dos tercios de sus diputados.

¿Por qué no explica su proyecto político? Porque es inconfesable. Rajoy juega a no hacer política como modo de disimular la política que está haciendo. Rajoy ha aceptado acriticamente la agenda de liquidación de derechos básicos de los ciudadanos (**en salud, en trabajo, en educación**) que cambia por completo las relaciones sociales, desboca las desigualdades y la exclusión y nos conduce a una sociedad en la que tener trabajo ya no es garantía de vida digna. Y está completando el saqueo con la imposición por vía legislativa de valores propios de la España más reaccionaria. En Europa, alucinan.

La obligación de un gobernante es afrontar los problemas. Y hacerlos evolucionar. Casi nunca se resuelven definitivamente, pero pasan a otra fase, se metamorfosean y, a veces, incluso dejan de ser problema. Pero esta tarea empieza por el reconocimiento de los interlocutores, que es lo que el PP niega cuando utiliza la descalificación como respuesta —“Catalunya no puede volver a la Edad media”—; cuando desprecia al adversario —ya sea un movimiento social o un proyecto político; o cuando calumnia al oponente, por ejemplo la vergonzosa comparación que hizo Dolores de Cospedal del independentismo catalán con el terrorismo vasco.

Ocultar la verdadera estrategia y negar lo que no gusta no es hacer política. Es bloquear la vida democrática, para imponer un modelo de sociedad basada en el sálvese quien pueda y en el patriotismo como forma de cohesión contra los que osan hablar de irse. Lo decía Felipe González en conversación con Artur Mas: **un problema que es de Estado no puede utilizarse con fines electorales**. Haría bien Rajoy en entender las señales que emite una ciudadanía harta de callar. **Con la crisis se ha intentado dismantelar el modelo social europeo para siempre**, pero también ha servido para romper la cultura de la indiferencia que tanto allanaba la tarea.

La soberbia del PP

David Ortega Gutiérrez es Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Rey Juan Carlos

Hay frases que reflejan una forma de entender la vida, una manera de pensar o cómo nos relacionamos con los demás. Estas frases alcanzan especial relevancia si se pronuncian en un foro público de calado y además, por una persona con importante peso institucional. Todo ello aconteció el pasado viernes 31 de enero en la Convención Nacional del Partido Popular en Valladolid. Lógicamente, lo que haga el partido político que sustenta al Gobierno de la Nación tiene siempre una acentuada consideración, pero en esta ocasión la expectativa, si cabe, era aún mayor, dados los recientes acontecimientos que ha vivido el PP con su división interna -espantada de Vidal-Quadras, nacimiento de un nuevo partido VOX con antiguos miembros del PP, alejamiento de Mayor Oreja, incluso del propio expresidente Aznar-.

En este contexto de cuestionamiento y dificultad, en la sesión inaugural de la Convención, nada menos que la número dos del PP y secretaria general, amén de Presidenta de la Comunidad de Castilla-La Mancha, se desmarca con las siguientes y sorprendentes palabras como opciones políticas para España: **“El PP o la nada”**. Realmente estimo que este mensaje es digno de ser pensado y reflexionado, ya que refleja una muy preocupante forma de entender la política y el interés general de 47 millones de personas.

De entrada, los planteamientos extremos y radicales suelen ser peligrosos. Los términos todo, nada, siempre, nunca, todos, ninguno, etc., no reflejan un pensamiento sensato ni prudente, algo esencial en política. En importante medida, la expresión busca reflejar que solo yo y los míos valemos y que fuera de nosotros, los que pertenecemos al Partido Popular, los demás no valen nada. Verdaderamente es un pensamiento con desasosegantes tintes totalitarios, buscando la exclusión de todo lo que no seamos nosotros, el resto de políticos y partidos se equiparan a la nada, no valen, no existen.

Parece que ante una situación de debilidad y cuestionamiento, se opta no solo por sacar pecho, si no por despreciar al otro, a todo el que no sea yo y mi grupo o partido. Esto siempre es un mal camino, sobre todo si hablamos de quien tiene la responsabilidad de gobernar España y muchas Comunidades Autónomas y municipios. ¿Reflejan seriedad, prudencia y responsabilidad unas declaraciones así? Sin duda es un muy mal mensaje que dice muy muy poco de quien lo da y a quien representa. Realmente viene a confirmar el peligro y el endiosamiento que parece dan las mayorías absolutas.

Vivimos tiempos complejos, todos los son en su medida. La prudencia, el respeto y la inteligencia son fundamentales para poder avanzar en la solución de los importantes problemas que tenemos. Hay que escuchar, admitir los errores y tener grandeza de miras. El desprecio a los demás, la soberbia del **“o yo o el caos”** -que en el fondo suele ser lo mismo- es una burda forma de tratar de matar la esperanza, la alternativa. No ha estado muy centrada pues Dolores de Cospedal con su ya célebre frase. Se le ha ido bastante la mano en un momento en el que precisamente hay que demostrar lo contrario. Transmite el PP nerviosismo e inseguridad, cuando se ve en la necesidad de decir cosas tan raras como insensatas y alejadas del más mínimo sentido común.